

[988]

## RECRUDECIMIENTO DE LA VIOLENCIA EN EL SALVADOR

Desde el triunfo de ARENA en las últimas elecciones legislativas se aprecia un recrudescimiento de la violencia en El Salvador. El fenómeno es complejo y, por ello, la referencia al triunfo electoral de la derecha no debe tomarse en principio como motivo de inculpación total, no obstante su influencia sobre determinadas formas de violencia, especialmente las relacionadas con los escuadrones de la muerte.

Pero el fenómeno no se reduce a las acciones de los escuadrones de la muerte. Está también el aumento de casos de graves violaciones de los derechos humanos, atribuidos a la Fuerza Armada, entre los que destaca por sus implicaciones la matanza de San Sebastián; asimismo una mayor contundencia de los cuerpos de seguridad en la contención de las manifestaciones populares. Está asimismo el recrudescimiento de la violencia por parte del FMLN, no sólo en la línea de una mayor actividad estrictamente militar, sino también en formas de violencia contra objetivos civiles y, lo que es más significativo, contra personas civiles, asesinadas por el hecho de ser alcaldes en zonas conflictivas o por ser consideradas confidentes de la Fuerza Armada.

Tanta ha sido la alarma por este recrudescimiento de la violencia que se ha llegado a afirmar la probabilidad de que El Salvador vuelva a entrar en una etapa similar a la de 1980-1982, en la que los problemas y tensiones se enfrentaban con las más distintas formas de guerra sucia y de terrorismo.



Ante esta nueva situación cabe preguntarse, en primer lugar, si se da efectivamente una tan grande acumulación de hechos violentos, que deba hablarse de una nueva estrategia por parte de las distintas fuerzas en conflicto, y, en segundo lugar, investigar y definir el sentido y explicación de la nueva coyuntura. Finalmente podrá hacerse un enjuiciamiento de la nueva situación tanto en términos éticos como políticos.

1. ¿Supone el actual recrudecimiento de la violencia un cambio de estrategia?

Son muchas y variadas las fuentes que subrayan el recrudecimiento de la violencia. Lo hacen los organismos defensores de los derechos humanos, lo hace la Iglesia y hasta lo reconocen el gobierno y la Fuerza Armada. Tal es el dictamen también del enviado especial de las Naciones Unidas, que vigila la mejora o el empeoramiento de los derechos humanos en El Salvador. El señor Pastor Ridruejo, que en los últimos informes iba señalando anualmente la consolidación de una mejoría constante, se ha visto obligado este año a dar una llamada de atención ante lo que ha supuesto un claro retroceso.

Uno de los capítulos más preocupantes es el de la reaparición o, al menos, el de la mayor presencia de los llamados escuadrones de la muerte, presentes en su actividad macabra a lo largo de estos años, pero que en los últimos meses habrían hecho notar más su presencia asesina. Americas Watch ha hablado de una triplicación de los asesinatos atribuidos a escuadrones de la muerte, ofreciendo cifras y



hechos concretos que comprueban su aseveración. Las víctimas no han sido personajes conocidos y connotados sino más bien personas innombradas políticamente, pero que se suponen relacionadas con el movimiento sindical o el movimiento revolucionario.

En segundo lugar están las acciones de la Fuerza Armada contra la población civil, no sólo por efecto de uso indiscriminado de armas sino por acciones directas. Un ejemplo muy significativo de ello supuso la masacre de diez campesinos, a manos de integrantes del batallón Jiboa, en la jurisdicción de San Sebastián, el día 21 de septiembre. Y es significativo no sólo por la matanza misma sino por las explicaciones que de ella dió la Fuerza Armada e incluso el Presidente de la República, al menos en un primer momento. Se pretendió atribuir la acción al FMLN, se urdieron sucesivas explicaciones falsas para no aceptar responsabilidades y se sigue haciendo todo lo posible para no enfrentar la situación, en la que presuntamente están involucrados no sólo elementos de tropa sino oficiales y jefes. El modo de ejecutar la acción y, sobre todo, el intento de encubrirla, muestran cómo no se ha llegado a sanear la Fuerza Armada. Sigue siendo posible la acción terrorista y sigue predominando la estrategia de evadir responsabilidades, con lo que se facilita la prosecución de los mismos hechos. Si no llega a ser por la actividad diligente de los medios de comunicación, de la Iglesia e incluso de la Embajada de Estados Unidos, hubiera prevalecido la explicación falsa y no se hubiera hecho nada por castigar a los culpables. Aun con toda la presión habida, se está lejos de haber depurado responsabilidades y de haber castigado a los culpables.



En tercer lugar están los hechos terroristas atribuidos al FMLN. Los asesinatos de alcaldes no son nuevos, pero sí su acumulación; los ajusticiamientos de informantes y la pena de destierro contra quienes le impiden al FMLN sus acciones políticas y militares tampoco son nuevos, pero se han concentrado en los últimos meses; las acciones con bombas, aprovechando o no los carros para asegurar su efecto, contra objetivos civiles y con manifiesto peligro de ocasionar víctimas inocentes, se han intensificado notablemente, especialmente en San Salvador, lo cual tiene su importancia peculiar por la resonancia que adquieran.

En cuarto lugar está el aumento sistemático cuantitativo y cualitativo del accionar estrictamente militar por parte del FMLN, pues en este capítulo no puede decirse lo mismo de la Fuerza Armada. No se trata tan sólo de continuar lo que el FMLN ha venido en llamar la destrucción de la infraestructura económica, que debilitaría el poderío militar de la parte gubernamental por razones obvias, sino de multiplicar acciones militares, que permiten hablar de la puesta en marcha de lo que el FMLN venía denominando contraofensiva militar. Características de esta nueva etapa serían la extensión de la guerra a todo el territorio, reflejadas en ataques a posiciones militares o quasi-militares en lugares como Atiquizaya en el Occidente del país, que hasta hace poco parecía inalcanzable para el FMLN; estaría también la continuidad de las acciones por un largo periodo y en todos los frentes y no sólo algún golpe fuerte espaciado o continuado tan sólo en alguno de los frentes; estaría asimismo el acercamiento progresivo de los ataques al corazón



mismo de la ciudad, comprobado sobre todo en el ataque al cuartel general de la Guardia Nacional con resultados reales y propagandísticos importantes. Todo ello supone la superación de una etapa predominante defensiva de emboscadas para entrar en una etapa más ofensiva, que en buena parte deja a su vez a la Fuerza Armada a la defensiva y le obliga a una remodelación de su estrategia militar.

Tales son algunas de las características complejas y estructuradas de lo que puede estimarse como el acrecentamiento de la violencia en estos últimos meses. ¿Suponen un cambio de estrategia en alguna de las partes beligerantes o en todas ellas? ¿Se está entrando en otra etapa distinta por lo que toca al uso de la violencia para resolver los problemas del país?

Si tratamos de responder por lo que se refiere, en primer lugar a la parte antirrevolucionaria, dentro de la cual se encuentran fuerzas tan distintas como el gobierno, los partidos políticos, excepto Convergencia Democrática y UDN, la administración norteamericana, la Fuerza Armada, los escuadrones de la muerte, etc., la respuesta debe ser negativa. La acumulación de hechos violentos atribuibles a esta parte no suponen cambio sustancial de la estrategia político-militar de guerra de baja intensidad seleccionada y diseñada por Estados Unidos y aceptada por el gobierno y la Fuerza Armada, principales realizadores de la misma. No se ha pasado ni hay síntomas de que se va a pasar de la guerra de baja intensidad a una guerra total, a una guerra sucia. Los síntomas que de esto pudieran verse tanto en el comportamiento de los batallones militares como de los cuerpos de seguridad no son



suficientes para hablar de un cambio de rumbo estratégico. Ni antes se dejaban de dar estos hechos ni ahora se dan de una forma absolutamente nueva ni en la cantidad ni en la forma.

Y en contrapartida pueden traerse argumentos, como la mayor presencia tolerada de políticos de oposición, alguno de ellos muy significativo, que no han sido objeto de atentados, como los que eran habituales en 1980-1982; asimismo las formas de represión, sin víctimas mortales, de importantes y agresivas movilizaciones de masas, las cuales, aunque han pasado de formas "franciscanas" de actuar a otras más duras y aun exageradas, no han sobrepasado la frontera de los disparos mortales a los participantes en ellas, según el propósito declarado de no querer dar mártires a la oposición revolucionaria y no alentar así la revuelta y aun la insurrección.

Los hechos por la parte antirrevolucionaria tienen, entonces, otra interpretación.. De momento se trata de una nueva coyuntura, explicable por una serie de factores políticos conjugados, que permiten el aumento de violaciones de los derechos humanos sobre todo del lado de los escuadrones de la muerte. Entre ellos pueden señalarse el triunfo electoral de ARENA, la creciente debilidad del gobierno de Duarte, el cambio de embajador estadounidense, el ascenso de los componentes de la tandona a puestos de mayor responsabilidad militar, las elecciones norteamericanas con el miedo de que puedan darse cambios, que afecten a El Salvador y, en general, todos los factores de un período de transición, que permiten excesos puntuales, pero no el establecimiento de una nueva línea estratégica, no obstante la mayor presión del FMLN,



que también ha influido para que se den respuestas en la línea de la violencia terrorista de la derecha.

Pero, si en la parte antirrevolucionaria no puede hablarse todavía de un cambio profundo y consolidado de estrategia en la cuestión de la violencia, las cosas son diferentes en el caso del FMLN. Ciertamente el movimiento guerrillero de El Salvador ha hecho permanente uso de lo que puede llamarse violencia revolucionaria. Esta violencia tiene un componente esencial que es la lucha armada del ejército revolucionario contra el ejército gubernamental; tiene también un componente de destrucción de la infraestructura económica del país a través del sabotaje con el objetivo de paralizar lo que llaman economía de guerra; tiene finalmente un componente de violencia de las masas, cuyo efecto destructor es menor, pero con la que se pretende entrenarlas para acciones de mayor envergadura y alentar los potenciales ánimos insurreccionales de la población.

Pero todo este conjunto de factores ha sido manejado por el FMLN de distinta forma según las circunstancias del desarrollo de la lucha. Y, al parecer, piensa el FMLN que en El Salvador se ha entrado en una fase nueva, caracterizada por el fracaso del proyecto norteamericano tras la finalización de los gobiernos de Reagan y de Duarte, por el empeoramiento importante de las condiciones de vida de la población salvadoreña, por las contradicciones multiplicadas en el poder político y en el poder militar, y, sobre todo, por el acrecentamiento y acumulación de su propia fuerza. Todo ello le ha llevado al FMLN a un reacomodo importante de su estrategia que, manteniendo la oferta de



encontrar una solución negociada, implica una vigorización notable de los tres frentes de su violencia: el estrictamente militar, el del sabotaje y el insurreccional. Por otra parte, con la idea fundamental de que se da en el país un doble poder, quiere resaltar este aspecto por la presión sobre funcionarios estatales que ejercen su mandato en zonas de mayor presencia guerrillera, llegando en esta presión a ajusticiar a quienes no obedecen a sus requerimientos.

Cabe, por tanto, decir que no ha habido cambio sustancial en la estrategia del uso de la violencia por parte del sector antirrevolucionario, aunque se ha dado un recrudecimiento deplorable de los hechos violentos. Cabe, asimismo, decir, que si se ha dado un cambio importante en el modo de la estrategia revolucionaria y que, por parte del FMLN, se está entrando en una nueva fase del uso de la violencia, sobre todo de la violencia militar y de la violencia insurreccional, apreciándose también un cierto acrecentamiento de lo que debería llamarse violencia terrorista, tipificado sobre todo en el asesinato de los alcaldes y, más aún, en el caso de Tres Ceibas, si se comprueba definitivamente la presunción de que fueron comandos guerrilleros, disfrazados de soldados de la primera brigada, quienes asesinaron a las víctimas, según se desprende de las investigaciones de Tutela Legal (Proceso, 360, 14-16). La defensa de los derechos humanos sobre las actividades militares y paramilitares y la presión

interna.

2. Interpretación e implicaciones de la nueva situación a vez más urgentes. No se trata de autorizar, porque los hechos no necesitan de

a) El recrudecimiento de la violencia por parte del sector antirrevolucionario supone que la amenaza de una violencia cada vez



mayor, de una creciente violación de los derechos humanos, sigue siendo posible. Es hoy más difícil que esto ocurra de lo que era en los primeros años de la década de los ochenta, pero la tentación de recurrir a métodos terroristas y aterrorizadores para conseguir resultados en favor de los propios intereses y del propio poder, sigue aún viva, y si no se pone en práctica es porque se tiene miedo a sus consecuencias. No es acertado decir que no han cambiado las estructuras del terrorismo y de que sigue el mismo montaje estructural, que posibilitó y facilitó las masacres de 1980-1982. Pero si es acertado asegurar que no se ha desmontado totalmente ese montaje estructural, ni siquiera en lo que hace relación inmediata y exclusiva con la Fuerza Armada y mucho menos en lo que hace relación con sectores extremistas de la derecha. El que no se haya podido condenar pública y judicialmente a ninguno de los jefes militares responsables de gravísimos actos terroristas y el que no se haya podido desmontar los escuadrones "privados" de la muerte, a no ser en el caso de los secuestros y ello con serias limitaciones, muestran la precariedad de la lucha contra el terrorismo de estado y contra el terrorismo de la extrema derecha.

Por todo ello, la vigilancia informativa, la atención diligente de los organismos nacionales dedicados a la defensa de los derechos humanos sobre las actividades militares y paramilitares y la presión internacional siguen siendo indispensables y hoy día otra vez más urgentes. No se trata de exagerar, porque los hechos no necesitan de ninguna exageración, ni se trata de desinformar o descalificar por razones puramente políticas. Las cosas, tal como están, son muy graves



en sí mismas y potencialmente todavía más peligrosas. Por ello el informe y el juicio, lo más objetivos posible, siguen siendo un gran servicio prestado a la causa de la justicia y de la paz.

Este tipo de acciones, por debajo de su explicación coyuntural, plantean la gran cuestión de por qué no terminan de darse y, sobre todo, de si es probable que se multipliquen y endurezcan, porque de momento no parece probable el que se vuelvan a constituir en elemento fundamental de la estrategia contrainsurgente. La primera parte de la pregunta queda prácticamente respondida con lo ya escrito. Por un lado, una dosis relativamente pequeña de violencia contrainsurgente viene a prolongar los efectos de la terrible dosis de represión de los años anteriores, especialmente de la gran masacre, casi genocidio, del 80-82, cuyo resultado fue el aplastamiento por dos años del movimiento de masas. Por otro lado, de ninguna manera han desaparecido o han cambiado de disposición y aun de juicio quienes impulsaron el terrorismo, tanto de estado como de clase, para terminar con la revolución, aunque pueda apreciarse un cierto cambio importante en quienes entonces la toleraron o, por lo menos, no la impidieron o protestaron contra ella. La conjunción de ambas corrientes renovadas pudieran dar paso a una fase de neoterrorismo, que no tendría las características toscas del periodo pasado, pero que podría suponer un proceso de involución. No faltan quienes, aun ahora, sostienen la necesidad de volver a la mano dura y a la violencia del pasado, no sólo en la conducción de la guerra sino en la represión de las masas y aun de los opositores políticos e intelectuales. Tal posición, sin ser promovida por los responsables últimos de la estrategia principal, podría ser tolerada por ellos y aun



incorporada o, al menos, no fuertemente combatida en esa estrategia principal, que necesita mostrarse respetuosa de los derechos humanos y de las libertades fundamentales precisamente para justificar una solución predominantemente militar con abundante ayuda norteamericana. Algunos hechos y algunos escritos y despegados, calzados por los mismos grupos, que propiciaron el terrorismo de antaño, están volviendo a aparecer como prenuncio o incitación de cosas peores. De este modo, la explicación de por qué no cesa la violencia viene a ser la misma de por qué se ha acrecentado en estos últimos meses.

En los próximos futuros meses hasta que se consoliden los nuevos gobiernos de Estados Unidos y de El Salvador, no es probable un cambio de estrategia, pero no queda descartado un sostenimiento de la violencia actual y aun un cierto acrecentamiento de la misma. Hasta las elecciones de marzo de 1989 dependerá esto de los mismos factores, que en estos momentos la han hecho posible. No es que en lo fundamental haya un vacío de poder pues el binomio Fuerza Armada-administración Reagan no está debilitado, pero sí está debilitada la contraparte política ejecutiva. El binomio hará que las cosas no cambien en lo fundamental y la contraparte tal vez no pueda impedir adecuadamente los intentos no del todo sistemáticos, que los recalcitrantes puedan hacer por su cuenta.

Obviamente todo ello está en función de lo que haga el FMLN en las próximas fechas y más específicamente cómo se desenvuelva la violencia de las masas o algunas formas de previolencia insurreccional. No es probable que la Fuerza Armada, como un todo, se desespere por las



acciones estrictamente militares del FMLN contra ella misma o sus instalaciones. Pero si tiene alguna probabilidad el que acciones violentas en la ciudad, sobre todo en San Salvador, parezcan más peligrosas no sólo a la Fuerza Armada sino, sobre todo, a los sectores conservadores. Aunque el acontecimiento principal para ellos sigue siendo el de las elecciones de 1989 y un aumento de la violencia atribuible a los sectores conservadores podría redundar en su desventaja, al menos desde una perspectiva internacional, no podría descartarse el que quisieran tomar su defensa por sí mismos y dar salida a su miedo por acciones terroristas, que impidieran, por un lado, las grandes concentraciones combativas y que, por otro, trataran de desarticular la conexión de sectores urbanos con el FMLN.

Menos probable aún es que se realicen acciones violentas contra los candidatos políticos y contra las campañas políticas. Esto es posible desde perspectivas particulares y desde reacciones emocionales, pero dañaría la estrategia general, que implica demostrar a la opinión pública nacional e internacional la disponibilidad para todos del acceso al poder por la vía de las elecciones. Dicho en otros términos, es algo que no está programado y que ni siquiera les es útil y deseable a quienes nunca han abandonado por principio el uso de la violencia, aunque coyunturalmente vean las desventajas de ponerlo en práctica.

Todas estas presunciones y proyecciones son válidas hasta conocerse el resultado de las próximas elecciones presidenciales salvadoreñas. Una derrota en ellas del partido ARENA, podría cambiar en parte el escenario previsto, no tanto porque la dirigencia de ese partido lo



determinara, sino porque pudieran desesperarse algunos de los intereses económicos, que están detrás del partido y que en otras ocasiones optaron ya por la vía de la violencia y del terrorismo. Asimismo un cambio drástico en la correlación de fuerzas con el FMLN o un temor súbito de que las cosas fueran a complicarse para el proyecto contra-insurgente, podría llevar a medidas de emergencia, que implicarían un recrudescimiento aún mayor de la violencia. Pero, sin ser esta hipótesis del todo descartable, no es la que cuenta con mayor probabilidad.

La implicación que se desprende de esta interpretación es, por un lado, la de que de momento no se puede hablar de un cambio sustancial en la línea estratégica y en los comportamientos generales, por lo que toca a las fuerzas contrainsurgentes. Pero, por otro, la precariedad de la situación señala lo poco que se ha consolidado el llamado proceso de democratización, si es que tomamos como criterio fundamental del mismo, el respeto a los derechos humanos fundamentales. Asimismo, por lo que toca a la nueva estrategia del FMLN, se deduce lo poco que se ha avanzado hasta ahora, no ya en derrotar, pero ni siquiera en debilitar a las fuerzas insurgentes. Esto nos lleva a considerar qué significa el acrecentamiento de la violencia por parte del FMLN.

b) El FMLN entiende haber entrado en una nueva etapa, que a veces llama de definición. Para entenderla hay que tomar el conjunto de sus acciones como un todo, sin desconocer ninguno de los aspectos de la misma. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta no sólo el acrecentamiento de sus diversos frentes de lucha o de violencia, sino también su reciente ofensiva diplomática y su permanente oferta de terminar



determinara, sino porque pudieran desesperarse algunos de los intereses económicos, que están detrás del partido y que en otras ocasiones optaron ya por la vía de la violencia y del terrorismo. Asimismo un cambio drástico en la correlación de fuerzas con el FMLN o un temor súbito de que las cosas fueran a complicarse para el proyecto contra-insurgente, podría llevar a medidas de emergencia, que implicarían un recrudecimiento aún mayor de la violencia. Pero, sin ser esta hipótesis del todo descartable, no es la que cuenta con mayor probabilidad.

La implicación que se desprende de esta interpretación es, por un lado, la de que de momento no se puede hablar de un cambio sustancial en la línea estratégica y en los comportamientos generales, por lo que toca a las fuerzas contrainsurgentes. Pero, por otro, la precariedad de la situación señala lo poco que se ha consolidado el llamado proceso de democratización, si es que tomamos como criterio fundamental del mismo, el respeto a los derechos humanos fundamentales. Asimismo, por lo que toca a la nueva estrategia del FMLN, se deduce lo poco que se ha avanzado hasta ahora, no ya en derrotar, pero ni siquiera en debilitar a las fuerzas insurgentes. Esto nos lleva a considerar qué significa el acrecentamiento de la violencia por parte del FMLN.

b) El FMLN entiende haber entrado en una nueva etapa, que a veces llama de definición. Para entenderla hay que tomar el conjunto de sus acciones como un todo, sin desconocer ninguno de los aspectos de la misma. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta no sólo el acrecentamiento de sus diversos frentes de lucha o de violencia, sino también su reciente ofensiva diplomática y su permanente oferta de terminar



definitivamente el conflicto por la vía de la negociación. Desde esta perspectiva global, que tiene en cuenta la solución no sólo del conflicto sino de la crisis desde una perspectiva revolucionaria, es cómo deben interpretarse las implicaciones de la nueva fase.

Está, ante todo, el acrecentamiento de su actividad militar, que, sin abandonar la etapa del desgaste a la tropa enemiga, se abre a una ofensiva continuada contra objetivos militares y paramilitares. Esta nueva actividad pone de manifiesto lo errado de las afirmaciones, que sostienen un debilitamiento irreversible del FMLN. Puede decirse que en términos absolutos el FMLN está más fuerte que nunca y que, por tanto, no se le ha derrotado ni siquiera debilitado; puede decirse asimismo que el FMLN no podrá ser derrotado en un tiempo previsible y determinado, a no ser que se den condiciones radicalmente nuevas, entre las cuales debiera estar la intervención directa de los marines norteamericanos, cosa que no resulta de momento factible. Pero igualmente esta nueva actividad muestra que el FMLN no está en capacidad estricta y puramente militar de derrotar o debilitar sustancialmente a la Fuerza Armada. Se trata, en definitiva, de un equilibrio dinámico, que se presenta cada vez de forma distinta pero que no permite prever razonablemente una ruptura del equilibrio en favor de ninguna de las dos partes en conflicto. Puede estimarse que esto es un fracaso relativo del proyecto contrainsurgente y un éxito relativo del movimiento insurgente, pero no por ello cabe concluir que la vía puramente militar tenga perspectivas de decisión para ninguno de los dos bandos. va a ser una presión tan grande como



No parece desconocer esto el FMLN, pero el objetivo inmediato de esta nueva fase no es el triunfo militar. Su objetivo principal sería demostrar que la vía puramente militar debe ser superada y que así lo debieran admitir cuantas fuerzas internas y externas tienen alguna relación con el conflicto salvadoreño. De esa demostración debiera concluirse que ha de cambiarse fundamentalmente la estrategia seguida hasta ahora por Estados Unidos, la Fuerza Armada y el Gobierno de El Salvador, no para hacerse más militarista sino para entrar por el camino de una negociación real y realista. Piensan algunos que no se fuerza la negociación mediante una mayor demostración de poderío militar. No obstante, ésta fue la estrategia seguida cruel y despiadadamente por Estados Unidos para obligar a la rendición de Japón y es la misma seguida por la administración Reagan para obligar a cambios sustanciales en la política sandinista. Lo que estaría pretendiendo, entonces, el FMLN es convencer a Estados Unidos, a las fuerzas vivas de El Salvador y los países latinoamericanos y europeos, que sin el concurso positivo no de las fuerzas revolucionarias no se puede terminar con la guerra en El Salvador y, mucho menos entrar en la solución de los problemas del país; que la estrategia seguida hasta ahora no ha dado resultados ni los va a dar y que, por tanto, debe ser cambiada y no en la línea de más guerra sino de pronta negociación, y que ya es hora de definir la situación sin alargar la crisis y profundizarla hasta límites, que harían difícilísima la recuperación. Esta mayor presión militar para alcanzar la paz es posible que no baste por sí misma -y esto lo debería tener en cuenta el FMLN- precisamente porque nunca va a ser una presión tan grande como para que la otra

versión. Diversamente se entienda con la violencia el fin de la guerra.



parte, especialmente Estados Unidos, considere en peligro su situación de poder.

Por ello el FMLN utiliza una segunda línea de presión militar, la de destruir la infraestructura económica. Pretende con ello diversos objetivos (distraer los esfuerzos directamente ofensivos de la Fuerza Armada, debilitar el apoyo económico interno a la guerra, combatir a la oligarquía, entrenar a sus propios efectivos, etc.), pero uno de ellos es convencer a los capitalistas de El Salvador y a los más directamente preocupados por el desarrollo económico, que es necesario terminar cuanto antes con la guerra. No puede decirse que en parte no lo estén consiguiendo. Esta línea de presión, junto con la anterior, ha operado para que crezca el número de voces en favor de la negociación, pero tiene también sus contrapartidas. La principal es que agudiza las dificultades económicas de la población como es el caso, sobre todo, de los cortes de la energía eléctrica y de los paros al transporte, lo cual hace que, si, por un lado, la población desee que todo esto termine cuanto antes, por otro, se siente violentada y dificultada más que apoyada por este tipo de acciones, que se prolongan indefinidamente sin ninguna ventaja sensible para las clases populares.

Finalmente la violencia insurreccional de las masas. Su poder destructivo es de momento pequeño, pero desproporcionadamente llamativo y provocador. Su objetivo principal es animar a las masas a la insurrección que, junto con las otras formas de lucha, especialmente la estrictamente militar, podría acercar muy mucho al FMLN a la toma del poder. Derivadamente se pretende con la violencia insurreccional forzar



el proceso de negociación, al crear con ella un ambiente irrespirable e invisible para la mayor parte de la población, la cual obligaría a un inmediato proceso negociador. La dinámica contradictoria -no en el sentido positivo de la dialéctica sino en el sentido clásico de que un extremo excluye al otro- de esta violencia insurreccional exige profundizar en ella de modo particular, ya que equivocaciones en este punto pueden llevar a consecuencias deplorables.

Suponen los analistas del FMLN que las condiciones objetivas del país -creciente miseria de la población, contradicciones internas del proyecto contrainsurgente reflejadas en la crisis política, mayor y más radical actividad de las masas, expansión del FMLN por todo el país, etc.- favorecen un levantamiento insurreccional de una parte importante de la población. Dada la debilidad del poder estatal y dada la fortaleza del FMLN, esto supondría la posibilidad real próxima de que el FMLN alcanzara el poder o, al menos, lograra una negociación en términos muy favorables, similares por ejemplo a los conseguidos por los sandinistas en 1979. Respondería tal presunción a un análisis científico de corte leninista. Dejando de lado, si se está haciendo o no un correcto análisis leninista de la situación, lo cual habría que ponerlo muy en duda, convendría recordar que la causalidad histórica tiene mucho de casualidad, sin olvidar por ello que el azar tiene sus propias leyes y no se reduce a pura arbitrariedad. Para nuestro caso hay ciertamente condiciones objetivas y subjetivas que podrían hacer pensar en la probabilidad y no sólo en la posibilidad de una insurrección popular. Pero estas condiciones no son suficientes para causar o determinar la insurrección, porque hay también otras



condiciones objetivas y subjetivas, que introducen un muy elevado exponente de indeterminación y de casualidad. Ahora bien, la casualidad puede buscarse y favorecerse, pero no puede contarse con ella de forma irresponsable y dogmática, sobre todo, cuando la globalidad de los hechos y no sólo un conjunto sectorial de los mismos se resisten tenacemente a las hipótesis y los deseos insurrecionales.

Por otro lado, el problema de las masas, al cual ya dedicamos un editorial el año pasado (cfr. ECA, 1977, 415-434) es, en la situación concreta de El Salvador, sumamente complejo. Ciertamente no se necesita que toda la población pobre del país, ni siquiera su mayor parte, esté dispuesta a una insurrección o simplemente a un acrecentamiento cualitativo de su actuación social, pero no es cierto que basten las vanguardias y confundir a éstas con las masas. Las vanguardias podrán en el mejor de los casos conducir un movimiento de masas, pero no constituyen un movimiento de masas. En El Salvador algunos grupos sociales han logrado un alto grado de conciencia revolucionaria, de compromiso político y aun de audacia admirable. Pero en el sector mismo de masas, esto es, entre quienes sufren el peso de la miseria y de la injusticia estructural, ha habido también un alto grado de aprendizaje, que les ha llevado a un gran realismo político, el cual les lleva a concluir que, una actuación como la del periodo 1975-1982, supondría de nuevo un suicidio, cuyos resultados positivos serían del todo inseguros.

Las encuestas y las actuaciones demuestran hoy un gran apoyo de las masas a un proceso de negociación y demuestran que el apoyo a la



violencia insurreccional es muy pequeño en términos cuantitativos. Esto plantea un delicado problema de estrategia, sobre todo porque se da el peligro real de que los dinamismos de negociación y de insurrección se estorben mutuamente, aún más que los dinamismos de elección y de insurrección puedan dañarse entre sí. Nos estamos refiriendo a las masas mismas y no sólo a quienes estando en el poder se les trata de convencer sobre la necesidad de la negociación. Si lo que se desea de veras es terminar con el conflicto de manera razonable, si lo que se busca es una negociación profunda a corto plazo, si para todo ello se pretende, como es de razón y de justicia, el apoyo firme de las masas, entonces ha de plantearse de otro modo el papel que éstas deben jugar.

La única actividad efectiva de las masas no es ni la insurreccional, como lo pretende el FMLN, ni es la electoral, como lo pretende el proyecto contrainsurgente. Se trata de buscar y hallar el que las masas retomen el puesto que les corresponde, en lo que podría llamarse la lucha activa de las masas, una lucha primariamente social y no política, una lucha no armada, no destructiva, que saque su dinamismo y fuerza no de consignas de fuego sino de su propia realidad interesada y necesitada de salir adelante. Una lucha, por otra parte, que, sin descuidar las posibilidades ofrecidas por el juego electoral, vaya mucho más al fondo que éste, porque en las elecciones las masas apenas hacen otra cosa que elegir entre candidatos inconvenientes, desfigurados por la cultura de la imagen, de modo que se llega a elegir entre imágenes falsas y no entre realidades conscientemente asumidas.



Dicho de otro modo, la actividad de las masas no puede reducirse a la violencia insurreccional ni tiene por qué someterse a ésta, máxime cuando es discutible, si interesa y aun si es posible una toma del poder por la fuerza. Si el objetivo realista que se pretende por parte del FMLN-FDR, es la participación en el poder a resultas de un proceso de negociación, el peso de las masas debería ponerse directamente a favor de este objetivo, sin que esto excluya el que una parte de ellas se dedique a tareas más dinamizadoras, todo ello, no con un esquema de subordinación a las vanguardias ni en la estructuración orgánica ni en la dirección, sino con un esquema de convergencia autónoma, que respete de verdad a las masas y a sus diferentes tipos de organización. La aceleración y la radicalización han llevado y llevarán a que la mayor parte de la población, no sólo se retiren de acciones conjuntas, sino que se opongan a modos de actuar, que les parecen más peligrosos que útiles.

Se habla mucho de descontento popular, pero no se lo analiza a fondo y no se mide el impacto que sobre la explicación de ese descontento van consiguiendo las fuerzas contrainsurgentes. La miseria creciente es hoy más atribuida a la guerra que a la injusticia estructural, y la guerra es atribuida más al FMLN que a la Fuerza Armada o a Estados Unidos. El análisis racional de la guerra, de sus causas y de sus efectos, muestra la enorme responsabilidad que de ella tienen las clases empresariales, el orden económico internacional, los intereses norteamericanos, etc. Pero el impacto emocional, orquestado por los grandes medios de comunicación, señala al sabotaje, al desorden social y a otras acciones atribuidas al FMLN como las causas principales de la miseria creciente.



Si no hubiera guerra, se dice, habría más recursos para las necesidades sociales; si no se diera crisis social, las inversiones serían mayores y no se daría evasión de capitales; si no se destruyera la infraestructura, podría haber aumentado el PIB mucho más rápidamente.

Ahora bien, sobre las masas influye más el impacto emocional que el análisis racional. Se siente la carencia y necesidad de lo más básico, esto nadie lo discute, cada vez más apremiantes, pero no por eso se atribuye la responsabilidad de la miseria a las fuerzas contrainsurgentes, sino más bien a la acción de los revolucionarios. No importa que esto no sea así realmente, pero para entender la reacción de una gran parte de la población, es algo que ha de tenerse muy en cuenta. Los votos para ARENA son un claro indicio de ello. No son una condena del proyecto norteamericano, sino que son una condena del modo cómo lo ha conducido la Democracia Cristiana y son un apoyo a quienes están más lejos del FMLN y, por tanto, una condena implícita a la imagen que éste da. No era así en 1980-1982, pero el fracaso de aquella experiencia y la incapacidad del FMLN para obtener un triunfo militar han hecho que las cosas cambien notablemente. Querer repetir la experiencia trágica de entonces, resulta imposible y contraproducente. Inmediata de que la Fuerza Armada y los cuernos de seguridad van. Otra consideración muy distinta merece lo que pueda llamarse violencia terrorista, que deteriora la imagen del FMLN y le hace perder credibilidad nacional e internacionalmente. El asesinato de los alcaldes es sobre todo lo más dañino. La idea del doble poder es una idea abstracta y, desde luego, política. Es posible que para los habitantes de las zonas en conflicto, quede demostrado que la Fuerza



Armada y el Gobierno no pueden garantizar la seguridad de los funcionarios electos, pero se trata de municipios muy pequeños que por lo mismo empequeñecen la acción y la posición del FMLN: sólo en la periferia marginal del país, de modo esporádico y a través del terror puede el FMLN imponer su línea política. Ni siquiera en esas zonas sería capaz de contrarrestar políticamente la acción política de sus adversarios. Finalmente matar por razones políticas -y la función de los alcaldes es predominantemente política- a personas indefensas, desautoriza éticamente a quien lo hace. Y se pierde más que se gana con este tipo de acciones, incluso respecto de las masas. Son medidas que a corto plazo y en un territorio muy reducido pueden tener su utilidad, pero que a corto plazo y a mediano plazo en todo el territorio nacional y a mediano plazo en el territorio donde tienen lugar, traen grandes desventajas, incluso en el terreno político, ya no se diga en el terreno humano. Decir que los alcaldes son parte de la guerra es darle al adversario el pretexto de decir que el movimiento sindical es también parte de la guerra. Unos y otro pueden que lo sean, pero unos y otro lo son de tal manera, que no es lícito combatirlos a tiros.

Más complejo es el caso de los delatores, cuando su delación es causa inmediata de que la Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad vean favorecidas sus acciones militares o sus acciones policiales, causantes ambas de muertes seguras, que no se darian sin la acción delatora. Aun en estos casos, la violencia sigue siendo mala y debe ser evitada hasta el extremo de lo posible y nunca debe ir más lejos del mal que se pretende evitar. Desde el punto de vista ético, entra más en la teoría de la defensa justa, pero no debe olvidarse lo fácil que es extremarse



en el ejercicio de la propia defensa. Pero el que algunas de estas acciones sean disculpables en alguna medida, no muestra más que la irracionalidad de la guerra y la necesidad de terminar con ella. Mientras tanto, estas acciones deberían quedar estrictamente reguladas por lo determinado en los convenios internacionales.

Al contrario no admite el procedimiento de las elecciones presidenciales. 3. El aprovechamiento de la nueva situación

Parecería que las reflexiones anteriores hacen más responsable del recrudecimiento de la violencia al FMLN, que a las fuerzas contrainsurgentes, cuando esto no es así. El recrudecimiento de la violencia en cuanto violación de los derechos humanos, sentido en estos últimos meses, es atribuible en su mayor parte a todos aquellos que participan oficialmente o por libre en acciones de contrainsurgencia, a sabiendas de que es un tanto compleja la participación en ella de los distintos sectores: gobierno, Fuerza Armada, administración Reagan, extrema derecha, derecha no tan extrema, etc. Sin negar que ha aumentado también la violación de los derechos humanos por parte del FMLN, ha de atribuirse cuantitativa y cualitativamente la mayor tasa al conjunto de fuerzas contrainsurgentes.

Este es un punto esencial. La prédica norteamericana y la de los defensores del proyecto contrainsurgente ponen su acento en la democracia y en los procesos de democratización. Por múltiples razones teóricas y prácticas tal planteamiento, no sólo no es el más correcto, sino que se presta a grandes desviaciones prácticas. El acento principal debe ser el de los derechos humanos: el derecho a la vida, el



derecho a la subsistencia, el derecho a la satisfacción de las necesidades básicas, el derecho a la propia identidad, el derecho a la soberanía y autodeterminación, el derecho a la libertad, por no citar sino los fundamentales. Olvidarse de todo esto escudándose en que lo principal son las elecciones y en que está justificada la guerra porque el contrario no admite el proceso electoral como criterio primario y primero, supone un craso error y aun un delito de lesa humanidad. Las elecciones tienen su lugar, pero ese lugar no es el primero o principal, justificativo de la guerra y de la creciente violación de los derechos humanos. En El Salvador sigue habiendo terrorismo; más aún ha aumentado el terrorismo en estos últimos meses y de este terrorismo es responsable por comisión o por omisión el Estado, el gobierno, la Fuerza Armada y ARENA. En menor grado, el FMLN.

Por eso es imprescindible una nueva cruzada contra toda forma de terrorismo, dándole a este asunto la máxima prioridad. Ciertamente el FMLN debe cortar inmediatamente con la muerte de los alcaldes y acciones similares, pero los responsables del Estado deben terminar con las múltiples formas de asesinatos de civiles y acciones similares, así como con la impunidad de los responsables. El presidente Duarte tiene aquí una misión importante que cumplir en sus últimos meses de gobierno. Sería un terrible fracaso de su gestión, si el record de violaciones de los derechos humanos fuera a finales de su mandato similar al del comienzo; sería un terrible fracaso el que dejara sin explicar y sin castigar las masivas violaciones de los derechos humanos, que se dieron en el periodo de la permanencia en la Junta de 1980-1982, amparado en la teoría del perdón y del olvido, reflejada en



una injusta ley de amnistía, y que se han seguido dando, en menor grado, durante todo su gobierno. Debería ser para él un gravísimo problema de conciencia como hombre y como cristiano; se trata en definitiva de una impostergable e inevitable obligación, que además sobrepasa la obligación moral y se convierte en una obligación histórica. No sería justo que terminara engañándose a sí mismo, porque estaría ayudando a que el pueblo siguiese engañado. Si no se resuelve este punto, vano es hablar de democracia y ofrecer al FMLN participar en el proceso político, no sólo porque estaría amenazada su integridad física sino porque se les estaría ofreciendo una cuota de poder, hipotecada a los deseos de quienes en el país mantienen el poder real.

Pero no está tan sólo el problema del terrorismo sino el más general de la violencia. La violencia es el más irracional e injusto de los medios para resolver los conflictos humanos, por más que sea el más socorrido y, en casos, se constituya en un mal necesario. Si en El Salvador, la violencia no ha podido resolver los males del país sino que, más bien, los ha empeorado, es hora de que se programe un modo no violento para terminar con la violencia. Ya hemos dicho anteriormente que, incluso el uso de la violencia para conseguir la negociación, debiera manejarse con muchísimo cuidado, no sea que obtenga resultados contrarios a los pretendidos. Todavía sería peor el uso de la violencia para conseguir la victoria o para imponer una determinada opción política, pues tal procedimiento sería en claro detrimento de los derechos y necesidades de las mayorías populares y, por tanto, no sería aceptable ni desde un punto de vista político ni desde un punto de vista ético.



Es hora, por tanto, de buscar el otro camino, el camino de la negociación. Contra la violencia el diálogo y la negociación. Así lo está sosteniendo cada vez con mayor clarividencia y energía la Iglesia, no sólo desde la arquidiócesis de San Salvador sino también desde Roma. Así lo dejó bien en claro el Debate Nacional, con la representación de una parte importante de las fuerzas sociales del país. Así lo piden instancias tan democráticas y razonables como las Naciones Unidas, la OEA y la Comunidad Económica Europea. Poner condiciones incumplibles a esta salida negociada, es ser enemigo de la negociación y es ser partidario de la guerra. La paz justa tiene sus propias condiciones, pero la negociación no debe tenerlas. A ella sólo debe exigírsele que sea auténtica negociación. Si se sobrepasa el derecho a la vida, cuando se recurre a la violencia de la guerra, con mucha mayor razón pueden sobrepasarse otros derechos menores al derecho a la vida. Por ello muchas de las condiciones que se imponen a la negociación tienen más de pretexto que de razón.

Si el recrudescimiento de la violencia que se ha sentido en estos últimos meses, especialmente desde el triunfo electoral de ARENA, sirve para hacer un intento profundamente nuevo de negociación, la sangre tan injustamente derramada no lo habría sido en vano. Si estas reflexiones sirven para terminar con los modos equivocados e injustos de violencia y ayudan a abandonarlos en beneficio de los procesos de negociación, habriamos contribuido a que el proceso salvadoreño siga avanzando esperanzadamente entre tantas dificultades y pesadumbres.

